

Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió la demanda, declaró la existencia de la relación laboral, desde el 15 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2022, el despido injustificado y ordenó el pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar el régimen jurídico aplicable a la demandante, de acuerdo con la naturaleza jurídica contractual que la unió con la Ilustre Municipalidad de San Javier, desde el año 2015 al 31 de diciembre de 2022.”*

Cuarto: Que, con relación a este tema jurídico planteado para ser uniformado, la demandada ofreció, a modo de contraste, las sentencias dictadas por esta Corte, en las causas Roles N°1020-2018, N°6583-2018, N°12.119-2018 y N°15.615-2019, que, en síntesis, concluyen que los contratos de honorarios son una modalidad a través de la cual la municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal



finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve, con un claro propósito de promoción social, en forma permanente y habitual, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella y que por ser funciones propias, habituales y permanentes, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, dado que los caracteres de la relación revelan la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta, tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran una prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y se sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada, en lo pertinente, desestimó el arbitrio fundada en las causales de los artículos 477 y, en subsidio, 478 b) del Código del Trabajo, dado que, respecto de la primera, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito, de tal guisa no es factible impugnar el raciocinio valorativo que ha efectuado la sentencia de los medios de prueba aportados en el juicio, desde que esta apreciación incide en la determinación de los hechos de la causa, lo que es ajeno al objetivo de la infracción de ley. Así, los hechos que se tuvieron por acreditados en el motivo octavo de la sentencia impugnada, en la que se estimó que el *“vínculo que ha unido a las partes se enmarca dentro de la hipótesis de subordinación y dependencia contemplada en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo y no dentro de la figura de prestación de servicios a honorarios de naturaleza civil en los términos del artículo 4 de la Ley 18.883”* son inamovibles y, por tanto, su decisión resulta ajustada a derecho, desde que no se hizo más que aplicar la interpretación, con base al marco fáctico asentado, sin advertir una vulneración alguna de preceptos legales que pudiera incidir en la parte resolutive del pronunciamiento.

En lo relativo a la segunda, indicó, que no es útil para configurarla que el recurrente impugne sin mayor fundamento, la valoración de la prueba rendida, atendido que la expresión infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las normas de la sana crítica, dispuesta como motivo de nulidad, significa que ésta se configura mediando una aliteración ostensible,



posible de concluir de la sola lectura del fallo impugnado, lo que no aplica al caso en que la valoración de las probanzas no corresponda a la apreciación que efectúa el interesado en anular el fallo. Sin perjuicio, también se debe considerar que, el recurso de nulidad intentado no explicita de qué manera habría influido esta causal de nulidad en lo dispositivo del fallo, puesto que se limita a realizar un reproche abstracto que no se aviene con el carácter de derecho estricto que informa la presente vía procesal.

Sexto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la materia para unificación esgrimida por la demandada, tal exigencia no aparece observada, desde que las sentencias de contraste, sostienen que dada la forma como se prestaron y desarrollaron los servicios y su duración, estiman que existían indicios de laboralidad suficientes para calificar la existencia de una relación laboral, lo que coincide con lo resuelto en el fallo impugnado en que también se concluyó que existían indicios de laboralidad para calificar la relación como laboral y no de aquellas contenidas en el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la parte demandante, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de quince de enero de dos mil veinticinco.



Regístrese y devuélvase.

N°5.646-25.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Mireya López M., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la Abogada Integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco.



En Santiago, a catorce de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

